

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 13° Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-35058-2017  
CARATULADO : Fisco de Chile/ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A

Santiago, diecisiete de Julio de dos mil veinte

**VISTOS:**

Al folio 1 comparece don Jorge Escobar Ruiz, Abogado Procurador Fiscal (S) del Consejo de Defensa del Estado, en representación del **Fisco de Chile**, ambos domiciliados para estos efectos en Agustinas N° 1687, comuna de Santiago, quien deduce demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario de hacienda en contra de **Enel Distribución Chile S.A.**, del giro de distribución y venta de energía eléctrica, representada legalmente por don Andreas Gebhardt Strobel, ambos con domicilio en Avenida Santa Rosa N° 76, Piso 7, por los fundamentos de hecho y de derecho que señala en su escrito.

Al folio 18, se practicó la notificación personal subsidiaria al representante legal de la demandada.

Al folio 26 se contestó la demanda.

Al folio 28 la demandante evacuó el trámite de la réplica.

Al folio 30 la demandada evacuó el trámite de la réplica.

Al folio 31, se omitió el llamado a conciliación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil, y se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los allí señalados, resolución notificada a las partes a folios 32 y 33, respectivamente.

Al folio 103, encontrándose la causa en estado, se citó a las partes a oír sentencia.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**I.- EN CUANTO A LAS TACHAS.**

**PRIMERO:** Que las causales de inhabilidad tienen por objeto excluir un testimonio de la valoración del juez, en razón de verse afectada la veracidad o imparcialidad de una declaración por alguna de las causales establecidas en los artículos 357 y 358 del Código de Procedimiento Civil.

**SEGUNDO:** Que la demandada formula tachas en audiencia testimonial de 14 de febrero de 2019, incorporada al folio 63, respecto de los testigos Marcelo Antonio Godoy Estrada, Augusto Sebastián Palma Castro y Gonzalo Diego Valenzuela Velásquez, por la causal contemplada en el artículo 358 N° 5 del cuerpo legal ya citado, indicando que todos son dependientes del organismo estatal que resulta ser demandante en autos. En subsidio, deduce la tacha del numeral 6 del mismo artículo, por tener a lo menos un interés indirecto en el resultado del juicio.



Foja: 1

**TERCERO:** Que, al evacuar traslado a las tachas, la parte demandante solicita su rechazo, por no ser aplicable la primera inhabilidad a funciones públicos cuya relación contractual se encuentra regulada por el estatuto administrativo, pues la permanencia en sus cargos se encuentra regulada por ley. En cuanto a la imparcialidad de los testigos por tener interés directo o indirecto en el pleito, señala que la doctrina y jurisprudencia han sostenido reiteradamente que dicho interés debe ser pecuniario, lo que no configura en la especie.

**CUARTO:** Que de acuerdo al artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, “Son también inhábiles para declarar: 5°.- Los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio; 6°.- Los que a juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto”.

Que, en cuanto a la primera causal de inhabilidad planteada por la defensa de la demandada, si bien es cierto los tres testigos reconocen como su empleador al Laboratorio de Salud Pública Ambiental y Laboral, de la Subsecretaría de Salud Pública, representada en autos por el Consejo de Defensa del Estado, también es cierto que dicha causal está establecida en beneficio de quienes concurren a declarar por su empleador, cumpliendo la actual legislación laboral los fines protectores que le son propios, sin que se vea afectada su imparcialidad por la relación contractual que la liga a la parte que lo presenta, ello sin perjuicio del valor que se le otorgue en su oportunidad a su declaración, en conformidad a lo establecido por los artículos 383 y 384 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual no queda más que desestimar la tacha en este aspecto.

Respecto de la segunda causal de inhabilidad invocada, deducida de manera subsidiaria, es menester señalar que, de las respuestas de cada uno de los testigos a las preguntas de tacha formuladas por la contraria, no se desprende, a juicio de este Tribunal -como la norma legal lo indica-, ningún antecedente que permita siquiera suponer que tiene interés en el mismo, ya sea directo o indirecto, el que además, de acuerdo a la reiterada jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia debe ser de carácter económico. En efecto, los referidos testigos se limitan a señalar únicamente que trabajan para la Seremi Metropolitana de Salud, sin encontrarse configurado en autos algún tipo de interés de carácter pecuniario ni menos aún la existencia de antecedentes que permitan al Tribunal concluir en tal sentido.

Por estas consideraciones **se rechazan, sin costas**, las tachas deducida por la demandada en contra de los testigos Marcelo Antonio Godoy Estrada, Augusto Sebastián Palma Castro y Gonzalo Diego Valenzuela Velásquez, presentadas por la parte demandante.

**QUINTO:** Que, a su turno, la demandante formula tachas en audiencia testimonial de 5 de marzo de 2019, incorporada al folio 83, respecto del testigo Adolfo Sebastián Mallorga Llano, por la causal contemplada en el artículo 358 N° 5 del Código Adjetivo, indicando que el hecho de trabajar hace más de 30 años en la empresa



**Foja: 1**

demandada, le resta independencia e imparcialidad necesarias para declarar juicio, pudiendo depender de ello su estabilidad laboral.

**SEXTO:** Que, al evacuar traslado, la demandada solicita el rechazo de la tachá, argumentando que no basta que exista una relación laboral entre el testigo y la parte que lo presenta para configurar la causal, considerando además que la legislación laboral actual le da independencia al trabajador para declarar en juicio sin temor a perder su empleo.

**SÉPTIMO:** Que, si bien el testigo reconoce como su empleador a Enel, y siguiendo la misma línea de razonamiento del motivo cuarto en relación a la causal de inhabilidad invocada, también es cierto que la actual legislación laboral protege a los trabajadores que concurren a declarar por su empleador, sin afectarse su imparcialidad por la relación contractual que lo liga a la parte que lo presenta.

Por ello, acorde a lo razonado precedentemente, **se rechaza, sin costas**, la tachá deducida por la demandante en contra del testigo Adolfo Sebastián Mallorga Llano, presentado por la parte demandada.

## **II.- EN CUANTO AL FONDO.**

**OCTAVO:** Que al folio 1 comparece don Jorge Escobar Ruiz, Abogado Procurador Fiscal (S) del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, quien deduce demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario de hacienda en contra de Enel Distribución Chile S.A, representada legalmente por don Andreas Gebhardt Strobel, todos ya individualizados.

Expone que con fecha 16 de agosto de 2016, en las dependencias e instalaciones del Laboratorio de Salud Pública Ambiental y Laboral, dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública, ubicado en calle San Diego N° 630, pisos 7, 8 y 9, comuna y ciudad de Santiago, ocurrió un incidente eléctrico que, entre otros equipos, provocó un daño severo en un Espectrómetro Modelo ICP-MS, cuyo valor comercial asciende a la suma de \$285.000 USD.

Indica que dicho instrumento permite realizar el control analítico en forma cuantitativa de la mayoría de los elementos de la tabla periódica, partiendo de muestras medioambientales en disolución acuosa (por ejemplo, agua potable, APR, aguas de plantas de tratamiento, entre otros), y que también puede ser utilizado en el análisis de suelos y sedimentos. Agrega que con el equipo dañado, la Subsecretaría de Salud por intermedio del Laboratorio de Salud Pública no podrá cumplir a cabalidad los diferentes compromisos establecidos en el Plan Institucional, principalmente en lo relativo a la ejecución de los distintos Programas de Vigilancia de Calidades de Aguas.

Lo anterior explica la necesidad de adquirir un nuevo equipo Espectrómetro ICP-MS que, como se expuso, resultó dañado y sin reparación, como consecuencia del incidente eléctrico ocurrido el día 16 de agosto de 2016, que afectó a las dependencias del Laboratorio de Salud Pública, cuya responsabilidad atribuye a la demandada.



**Foja: 1**

Cita al efecto los artículos 1437, 2314 y 2329 del Código Civil, refiriendo que, al tratarse de una prestación de un servicio potencialmente riesgoso como es la distribución de energía eléctrica, la empresa demandada no fue diligente en la toma de medidas que impidieran el daño ocasionado en los aparatos electrónicos, en su caso, de un equipo Espectrómetro ICP-MS, cuyo valor es bastante alto, causándoles menoscabo por una falla propia del servicio de distribución.

Señala que, conforme a lo regulado en los artículos 221, 222, 223 224 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos aprobado por DS 327 del Ministerio de Minería, se establece como obligación del concesionario del servicio público de distribución, entre otras, cumplir con las normas sobre calidad del servicio, lo que incluye parámetros como la seguridad de las instalaciones y de su operación, el mantenimiento de las mismas, la oportuna atención y corrección de situaciones de emergencia, interrupciones de suministro, accidentes y otros imprevistos, y los estándares de calidad de suministro.

Previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario de hacienda contra Enel Distribución Chile S.A, acogerla a tramitación, y en definitiva, condenar a la demandada al pago de \$285.000 USD (dólares estadounidenses), correspondientes al valor comercial del equipo denominado Espectrómetro Modelo ICP-MS, cuya pérdida equivale a la fecha de presentación del libelo a la suma de \$186.399.719, más reajustes, intereses y costas.

**NOVENO:** Que al folio 26, comparece don Claudio Andrés Torres Reyes, en representación de la demandada, quien viene en contestar la demanda promovida en contra de Enel Distribución Chile S.A, solicitando su rechazo, con expresa condena en costas, por los argumentos que se expondrán a continuación.

En primer término, niega todos los hechos descritos en la demanda, como también la versión de los hechos de la actora, sosteniendo que, de conformidad a la regla de distribución de la carga probatoria contemplada en el artículo 1698 del Código Civil, corresponderá a la contraria acreditar precisamente los hechos y circunstancias relatados en su libelo, y probar la concurrencia de los elementos de la responsabilidad extracontractual, en concreto, la existencia de una acción u omisión atribuible al dolo o la culpa imputable a su mandante, que haya sido la causa de los perjuicios reclamados, los que también deben ser acreditados en autos.

Señala que la demandante no especifica ni describe someramente el “incidente eléctrico” ocurrido el 16 de agosto de 2016, en dependencias del Laboratorio de Salud Pública y Laboral de la Subsecretaría de Salud Pública, que habría provocado un daño severo en un Espectrómetro Modelo ICP-MS, cuyo valor comercial ascendería supuestamente a \$285.000 USD, reprochando que Enel Distribución Chile S.A no fue diligente en la toma de medidas que impidieran el daño ocasionado en aparatos electrónicos, como el caso del equipo mencionado, causando menoscabo por una falla propia del servicio de distribución.



**Foja: 1**

Alega el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad de la demandada, pues el relato de la actora trasluce la incidencia de su propio comportamiento en el incidente de marras, y que al no explicar cuál es el origen del mismo, ni el estado de sus instalaciones, su antigüedad, certificaciones ni mantenciones, no se puede atribuir a su representada las hipotéticas fallas que pueda presentar la instalación eléctrica al interior del laboratorio, pues estas son de responsabilidad del propietario, aún ante un sobreconsumo de energía, por la destinación natural de un establecimiento que utiliza gran cantidad de equipos eléctricos.

Por otro lado, la demandante no indica en el libelo haber adoptado algún dispositivo de protección ante eventuales fallas por sobrecarga, cortocircuito o falla de aislación, para evitar daños en el equipo supuestamente siniestrado, considerando su alto valor económico. De lo contrario, si el origen del incidente fuera una falla en la red de distribución eléctrica imputable a Enel Distribución Chile -cuestión que niega- necesariamente todo el sector aledaño al establecimiento habría resultado afectado, circunstancia de la cual nada se dice en la demanda, configurando así aquello que en doctrina y jurisprudencia se conoce como el “hecho de la propia víctima”, evento que interrumpe la relación causal respecto del demandado, pues atribuye el resultado dañoso únicamente a la conducta desplegada por el demandante.

Reitera la ausencia de elementos de la responsabilidad civil extracontractual, en particular, porque la demandante debe acreditar la existencia de la omisión atribuible a Enel Distribución Chile S.A, provocando los daños que se indican en el libelo, de manera que al no haber una acción u omisión imputable a su representada, menos podrá atribuírsele culpa o dolo, excluyendo así todo nexo causal entre los referidos actos y los daños reclamados, los cuales deben ser probados por la actora.

En subsidio de todo lo anterior, alega caso fortuito como eximente de responsabilidad de la empresa demandada, pues el incidente eléctrico en que se funda la presente acción es un hecho absolutamente ajeno a la voluntad de Enel Distribución Chile S.A. Ello, porque la contraria no especifica cuál habría sido la naturaleza del siniestro que presuntamente afectó un espectrómetro ubicado en el laboratorio de la Subsecretaría de Salud Pública, por lo que, al no describirse las circunstancias en que ocurrió el referido incidente, se constituye un hecho imprevisto e imposible de resistir, configurando de tal forma el caso fortuito como eximente de responsabilidad.

En cuanto al daño reclamado, destaca la improcedencia del cobro de \$285.000 USD por carecer su mandante de responsabilidad, como también, la obligación de la actora de acreditarlo, máxime cuando en la demanda no se indicarían expresamente cuáles son los daños sufridos por el equipo siniestrado, limitándose solo a señalar el valor del equipo nuevo, sin considerar antigüedad y desgaste propios del uso del Espectrómetro.

Sostiene que la solicitud de reajustes es improcedente, toda vez que la pretensión económica de autos ha sido formulada en dólares, considerando que en ese tipo de



**Foja: 1**

cambio ya está contenida la reajustabilidad, por lo que aplicar reajuste conforme a variación del IPC a la divisa implica utilizar doble reajuste, lo que es contrario a los fines resarcitorios de la presente acción. Asimismo, indica que el cálculo debe hacerse en etapa de cumplimiento, una vez que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Finalmente, y para el caso de que la acción sea acogida, solicita la aplicación del artículo 2330 del Código Civil, para efectos de reducir la indemnización reclamada, por cuanto existe exposición en forma imprudente e innecesaria de la demandante al sufrir el siniestro sub iudice.

**DÉCIMO:** Que al folio 28 la parte demandante evacúa el trámite de réplica y al folio 30 la demandada, el de dúplica, omitiéndose el llamado a conciliación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil.

**UNDÉCIMO:** Que al folio 31, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los allí indicados, resolución notificada a las partes a folios 32 y 33, respectivamente.

**DUODÉCIMO:** Que la parte demandante a fin de acreditar los fundamentos de su libelo, rindió la siguiente prueba instrumental:

Al folio 5:

1.- Certificado bancario de 12 de diciembre de 2017, que da cuenta del valor del dólar a la fecha de presentación de la demanda.

Al folio 66:

2.- Ordinario N° 936 de fecha 14 de febrero de 2017 de la Seremi de Salud Metropolitana al Subsecretario (S) de Salud Pública, a través del cual se solicita apoyo para recuperación de Equipo ICP-MS dañado y sin reparación en incidente eléctrico de fecha 16 de Agosto de 2016, con documento adjunto denominado “Carta respuesta de la empresa Enel Distribución, Referencia: Equipo dañado sin reparación” tipificada con el código AICN°74401678, de fecha 23 de noviembre de 2016, comprometiéndose la compañía a compensar el equipo dañado.

3.- Copia de correo electrónico enviado con fecha 23 de noviembre de 2017 por doña Maricel Vidal Oyarce, Jefe Laboratorio de Salud Pública Ambiental y Laboral SEREMI de Salud Región Metropolitana, en la cual constan las gestiones para reparar equipo dañado en incidente eléctrico.

4.- Presupuesto del proveedor “Del Carpio Análisis y Asesorías” dirigido al Ministerio de Salud, a la Subsecretaria de Salud Pública y al SEREMI de Salud Región Metropolitana, con fecha 9 de noviembre de 2017, en el cual consta cotización QN 13072.17, correspondiente a un Sistema ICP/MS modelo iCAP RQ+ Autosampler de marca THERMO FISHER SCIENTIFIC, por \$241.275 USD.

5.- Presupuesto del proveedor “Del Carpio Análisis y Asesorías” dirigido al Ministerio de Salud, a la Subsecretaria de Salud Pública y al SEREMI de Salud Región Metropolitana, con fecha 28 de enero de 2019, en el cual consta cotización QN



**Foja: 1**

13977.19 correspondiente a un Sistema ICP/MS modelo iCAP RQ+ Interface para GC-HPLC de marca THERMO FISHER SCIENTIFIC, por \$241.512 USD.

6.- Guías de despacho N° 021270, 021269 y 021271, de fecha 16 de agosto de 2016; N° 0021355 de fecha 19 de agosto de 2016; N° 0021363 y 0021364, de fecha 23 de agosto de 2016; N° 0021394 de 5 de septiembre de 2016; donde consta el retiro de los equipos dañados –incluyendo el Espectrómetro- desde las instalaciones del Laboratorio de Salud Pública Ambiental y Laboral, dependiente de la Subsecretaria de Salud Pública, ubicado en calle San Diego N° 630, pisos 7 y 8, Santiago, por parte de la empresa contratista de Enel, RIQUES Ltda.

7.- Guías de despacho N° 0021353 y 0021354, de fecha 19 de agosto de 2016; N° 0021352 de 20 de agosto de 2016; N° 0021351 de fecha 22 de agosto de 2016; N° 0021367 y 0021368, de fecha 24 de agosto de 2016; donde consta el reingreso de los equipos por parte de la empresa RIQUES Ltda., a las instalaciones del Laboratorio de Salud Pública Ambiental y Laboral, dependiente de la Subsecretaria de Salud Pública, ubicado en calle San Diego N° 630 pisos 7 y 8, Santiago.

8.- Copia de correos electrónicos suscritos entre el Sr. Adolfo Mallorga Llano, Analista Comercial Unidad Post Venta de Enel, y el representante del proveedor del equipo dañado, don Leonardo del Carpio, entre 14 y 20 de septiembre de 2016, en los cuales solicita información respecto de la reparación de un cromatógrafo iónico ICS-3000, que fue realizada por la empresa RIQUES y sobre el equipo ICP-MS, totalmente dañado y motivo de la demanda de autos.

Al folio 84:

9.- Oficio remitido por “Del Carpio Análisis y Asesorías”, solicitado por resolución de folio 73, y recepcionado por el tribunal con fecha 8 de abril de 2019, a través del cual se informan valores actualizados de cotización por equipo espectrómetro dañado.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, además, al folio 63, rindió prueba testimonial, haciendo comparecer a estrados, a los testigos Marcelo Antonio Godoy Estrada, Augusto Sebastián Palma Castro y Gonzalo Diego Valenzuela Velásquez, cuya declaración consta en acta de fecha 14 de febrero de 2019.

El primer testigo señala que el día en cuestión -16 de agosto de 2016- al ingresar a las instalaciones del laboratorio de la Seremi de Salud Metropolitana, entre las 8 y 9 de la mañana, constató una anomalía con las luminarias, las cuales estaban sobre potenciadas con una incandescencia aumentada, junto con ruidos y zumbido eléctrico. Al recorrer las oficinas, se percató que lo mismo ocurría en toda el área, procediendo a cortar la luz de los interruptores y desenchufar el equipamiento conectado a la red en los pisos 7 y 8. Una vez que llegó el resto del personal del laboratorio, les manifestó que había problemas con el suministro eléctrico, y durante el mismo día, se comprobó por inspección que algunos equipos no funcionaban, entregando a la jefatura el control administrativo para resolver la situación. En relación a los artefactos dañados con el



**Foja: 1**

incidente eléctrico, describe fallas en agitadores magnéticos, voltímetros y en el equipo ICP-Masa, que es objeto de esta causa, más computadores asociados, afectando el funcionamiento normal del laboratorio, pues se interrumpieron todas las actividades analíticas realizadas por dicha entidad.

El segundo testigo manifiesta que el incidente ocurrido el 16 de agosto de 2016 se produjo por un aumento de tensión entregada como suministro eléctrico que derivó en el mal funcionamiento de múltiples equipos del laboratorio y equipamiento de iluminación. Relata que se ocasionó un amago de incendio en una unidad conectada al equipo ICP-Masa, presentándose luego el personal de Chilectra para verificar la condición de los artefactos, constatando múltiples daños a los mismos. Refiere haber sido el encargado de coordinar el retiro, reparación y reposición de los dispositivos dañados con Riques Limitada, empresa relacionada con Enel, quien retiró el equipo ICP-Masa para evaluar el daño y efectuar un informe a su cliente sobre la reparación del mismo versus la compra de un equipo equivalente, cuyo valor fluctúa entre los 150 y 200 millones de pesos. Agrega que, los perjuicios se traducen en la pérdida de capacidad de análisis del laboratorio, menoscabando indirectamente los planes de vigilancia y fiscalización a nivel de la autoridad sanitaria regional y del Ministerio de Salud.

El tercer testigo declara que el día del incidente eléctrico subió el voltaje y, en consecuencia, el amperaje a una de las líneas eléctricas del laboratorio, provocando la destrucción y quema de varios equipos y computadores del recinto. Luego, llegaron al menos dos técnicos de la empresa demandada para verificar los tableros eléctricos, estado de luminaria y enchufes, y finalmente, el Sr. Mallorga de Enel junto con Patricio Riquelme, de Riques Limitada, quien fue comisionado para el retiro y reparación de los equipos dañados, entre el 16 y el 24 de agosto de 2016, con sus correspondientes guías de despacho, mientras que el equipo siniestrado fue retirado por la misma empresa a comienzos de septiembre, presentando este último daños irreparables. Añade que entre don Adolfo Mallorga, representante de Enel; don Víctor Berríos, Jefe de Laboratorio en esa época; don Patricio Riquelme, de la empresa Riques Limitada; y don Leonardo Del Carpio, representante de la marca Thermo en Chile, hubo diversas reuniones y comunicaciones a fin de encontrar la mejor forma de reponer el equipo ICP-MS, respecto del cual se informó la pérdida total. Concluye que, en las declaraciones de las cuadrillas de Enel y del Sr. Riquelme, se mencionó que la causa del incidente eléctrico fue una desviación de 12.000 volts que ingresaron a las instalaciones del laboratorio, destruyendo los circuitos de los equipos dañados, entre los cuales figura aquél que es objeto de la presente causa, avaluado en la suma aproximada de 340.000 dólares, con IVA incluido.

**DÉCIMO CUARTO:** Asimismo, con fecha 15 de abril de 2019, se llevó a efecto la audiencia de exhibición de documentos solicitada al folio 66, compareciendo la demandada a exhibir instrumento denominado “Informe Técnico” emitido por la





**Foja: 1**

empresa Riques Ltda, contratista de Enel -en ese entonces Chilectra- respecto del equipo siniestrado, incorporado por la requerida al folio 92.

**DÉCIMO QUINTO:** Que igualmente la parte demandante solicitó al tribunal prueba confesional del representante legal de la empresa demandada, don Carlos Andrés Freude Moreno, quien compareció con fecha 15 de abril de 2019, a absolver posiciones al tenor del pliego incorporado al folio 91.

El absolvente señala que es efectivo que la empresa Riques Limitada, elaboradora del informe técnico incorporado al folio 92, ha prestado servicios como contratista de Chilectra -hoy Enel- como también que don Adolfo Mallorga Llano, testigo de la demandada, trabaja para la compañía.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, por su parte, la demandada acompañó en autos la siguiente prueba documental:

Al folio 67:

1.- Informe Técnico emitido por la Unidad de Mantenimiento Subterráneo de Enel, con fecha 21 de septiembre del año 2016, respecto del incidente reportado el 16 de agosto del mismo año, por clientes del edificio ubicado en San Diego N° 630, Santiago. En dicho documento se informa que, a través de inspección realizada el mismo día, se verificó lo indicado por personal del Servicio de Emergencias, constatando que los cables conductores de la camarilla ubicada en Eyzaguirre con calle San Diego, se encontraban cortados, provocando las variaciones de voltaje que pudieron ocasionar los daños reclamados.

2.- Informe Técnico, maquina ICP Masa -ICAP Q, emitido por Riques Ltda, a través del cual concluye la imposibilidad de reparación del mismo.

3.- Carta respuesta de Enel a don Víctor Berríos Sepúlveda, Jefe de Laboratorio de Salud Pública, de fecha 23 de noviembre de 2016, informando gestión para pagar el valor de reemplazo del equipo dañado.

4.- Cartas respuesta de Enel a don Víctor Berríos Sepúlveda, Jefe de Laboratorio de Salud Pública, de fechas 07 de febrero, 18 de abril y 31 de octubre de 2017, reiterando la gestión anterior.

Al folio 69:

5.- Copia de aviso publicado en el portal de venta de equipos médicos [www.equipnet.com](http://www.equipnet.com) de un equipo de modelo similar e idéntica marca al demandado en autos, cuyo valor comercial es de USD \$35.000.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, además, al folio 83, rindió prueba testimonial, haciendo comparecer a estrados, al testigo Alfonso Sebastián Mallorga Llano, cuya declaración consta en acta de fecha 5 de marzo de 2019.

Señala que el hecho que dio origen al incidente eléctrico se produjo por un acto vandálico, consistente en el robo de cables de cámaras subterráneas, respecto del cual la compañía no tiene responsabilidad alguna. Sin embargo, en este caso y en todos los casos similares Enel se hace cargo de responder por los daños ocasionados, por tratarse



**Foja: 1**

de sus redes de distribución. Detalla que desde el día en que ocurrió la falla, la empresa envió un servicio técnico para el diagnóstico y reparación de todos los artefactos que resultaron dañados, pudiendo dar solución a la gran mayoría, menos al equipo reclamado en autos, el cual no tenía reparación, y respecto del cual Enel siempre estuvo dispuesta a pagar su valor. Explica que el pago no pudo efectuarse por problemas de gestión del laboratorio, pues nunca obtuvieron respuesta de quien sería titular del vale vista acordado como instrumento de pago. Finaliza su declaración indicando que el origen del incidente más que ser un caso fortuito, es un de vandálico, porque se violenta la cámara, rompiendo sellos de seguridad y provocando daños que pueden ocasionar cortocircuito e incluso incendio en la referida cámara.

**DÉCIMO OCTAVO:** Asimismo, con fecha 15 de abril de 2019, se llevó a efecto la audiencia de exhibición de documentos solicitada al folio 67, compareciendo la demandante a exhibir instrumento denominado “Declaración de instalación eléctrica interior” de la Normativa Chilena Eléctrica, emitido por Superintendencia de Electricidad y Combustibles, respecto del inmueble donde se encuentran ubicadas las instalaciones del laboratorio de la Subsecretaría de Salud Pública, incorporado por la requerida al folio 93.

**DÉCIMO NOVENO:** Que son hechos de la causa por así encontrarse establecidos o por haber sido reconocidos por las partes, los siguientes:

1.- Que el día 16 de agosto de 2016, se produjeron variaciones de voltaje en el sector donde se ubica el Laboratorio de Salud Pública Ambiental y Laboral, dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública.

2.- Que al recibir Chilectra -hoy Enel- reclamos de clientes que reportaban que el sector de calle San Diego N°630 se encontraba sin corriente, intermitente y con problemas de voltaje, concurrió personal de la compañía al inmueble, verificándose por la cuadrilla de Mantenimiento Subterráneo que los cables conductores de la camarilla ubicada en Eyzaguirre con San Diego se encontraban cortados, provocando variaciones de voltaje en el suministro eléctrico.

3.- Que producto de estas variaciones de voltaje, diversos equipos del referido laboratorio sufrieron daños en sus sistemas, siendo en su mayoría reparados por la compañía, a excepción del equipo Espectrómetro ICP-MS, el cual resultó totalmente dañado.

**VIGÉSIMO:** Que, previo a entrar en análisis del fondo, esta magistratura estima necesario revisar algunas disposiciones que dicen relación con el suministro eléctrico y la responsabilidad de sus proveedores.

El artículo 139 del DFL 4/2007, que establece el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL N° 1 de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, dispone que es deber de todo concesionario de servicio público de cualquier naturaleza, mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de evitar el peligro para las personas o cosas, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes.



**Foja: 1**

Asimismo, el artículo 224 del DS 327/97, que fija el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, establece que todo proveedor es responsable frente a sus clientes y usuarios, de la calidad de suministro que entrega, salvo en aquellos casos en que la falta no sea imputable a la empresa y la SEC declare que ha existido un caso fortuito o fuerza mayor.

Por su parte, el artículo 32 de la NSEG.5 E.n 71, Reglamento de Instalaciones de Corrientes Fuertes, señala que las sobretensiones peligrosas deberán ser evitadas, en cuanto sea posible, por una construcción apropiada de las instalaciones o en su defecto deberán ser atenuadas por el empleo de aparatos convenientemente elegidos.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que lo discutido en autos versa acerca de la efectividad y circunstancias en que ocurrieron los hechos fundantes de la acción, en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, siendo requisito previo si le cabe o no responsabilidad a la demandada Enel Distribución Chile S.A en el incidente eléctrico ocurrido el 16 de agosto de 2016 en las instalaciones del laboratorio de la Subsecretaría de Salud Pública ubicado en calle San Diego N° 630, comuna de Santiago, y que provocó un daño irreparable en uno de los equipos de dicha entidad.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que la responsabilidad extracontractual o aquiliana responde a la idea de la producción de un daño a otra persona por haber transgredido el genérico deber de abstenerse de un comportamiento lesivo a los demás. Al efecto, el artículo 2314 del Código Civil, dispone: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”.

En este orden de ideas, ha de señalarse que son requisitos copulativos del estatuto de responsabilidad civil extracontractual o aquiliana, además de la capacidad (que por constituirse en la regla general y no haberse alegado hipótesis de incapacidad alguna se da por concurrente): Una acción u omisión ilícita del agente; la culpa o dolo de su parte (elementos que se analizarán conjuntamente); el perjuicio o daño a la víctima; la relación de causalidad entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño producido; y, la ausencia de una causal de exención de responsabilidad.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que, tal como se señaló en el considerando precedente y atendida la íntima relación que existe entre aquellos, se procederá al análisis conjunto de los dos primeros elementos ya señalados, esto es, la acción u omisión ilícita del agente, con culpa o dolo de su parte.

En este sentido ha de establecerse en primer término que para que exista responsabilidad “es necesario que el daño provenga de un comportamiento objetivamente ilícito, contrario al ordenamiento jurídico, contrario a lo justo” (“Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual”, pág. 119, Editorial Jurídica de Chile, año 2003), y que la valoración de la licitud de este comportamiento puede fundarse ya sea en una infracción a un deber legal expreso, o en la transgresión del principio general de que



**Foja: 1**

no es lícito dañar sin causa justificada a otro. De ahí la íntima relación existente entre este elemento y la imputabilidad o reproche (culpa o dolo) del agente.

Que sobre este particular la actora ha esgrimido en su demanda como la acción u omisión reprochada a la demandada la negligencia de ésta, consistente en en la toma de medidas que impidieran el daño ocasionado en los aparatos electrónicos, en este caso, un equipo Espectrómetro ICP-MS, causándole menoscabo por una falla propia del servicio de distribución.

**VIGÉSIMO CUARTO:** Que la doctrina, conocida como de los actos propios, ha sido recogida en diversas disposiciones de nuestro Código Civil, como los artículos 1683, 1481, 1546, la que tiene su origen en uno de los puntales de nuestro sistema jurídico, esto es el principio de la buena fe. En efecto, la conducta contraria o disociada a una previa, por acción u omisión, importa una contravención al mencionado principio, toda vez que ante una misma situación jurídica la parte modifica su actuar con el objeto de obtener un beneficio en un litigio, apartándose del proceder que antes mantuvo. En otras palabras, el efecto que produce la teoría en mención es, fundamentalmente, que una persona no puede sostener con posterioridad, por motivos de propia conveniencia, una posición jurídica distinta a la que tuvo durante el otorgamiento y ejecución del acto, por haberle cambiado las circunstancias y, si así lo hace, habrán de primar las consecuencias jurídicas de la primera conducta u omisión, debiendo rechazarse la pretensión que se invoca, apoyada en una nueva tesis, por envolver un cambio de comportamiento que no se acepta.

Así, la procedencia de cierto derecho, se analiza auscultando el proceder previo desplegado por quien pretende ser titular. En este sentido, no cabe duda que la actitud de la demandada contraría sus actos propios, vulnerando el principio de la buena fe y, en consecuencia, no es digna de amparo jurídico.

Lo anterior es del todo relevante, pues en su escrito de contestación, dice negar todos los hechos descritos en el libelo pretensor, en circunstancias que la prueba aportada por ella misma indica lo contrario. De esta manera, no puede desatenderse por la empresa demandada la ocurrencia de los hechos relatados en la demanda, toda vez que del instrumento denominado “Carta respuesta de Enel de 23 de noviembre de 2016”, incorporado al folio 67, emitida por don Jorge Recabarren, Jefe de Unidad Post Venta Enel, se desprende que el proveedor de suministro eléctrico, en cumplimiento con la normativa legal, como mecanismo de solución ante la pérdida total del Espectrómetro, e impedida de reemplazarlo, acordó proceder al pago de la valorización comercial de un nuevo equipo, monto que es precisamente reclamado en autos.

**VIGÉSIMO QUINTO:** Que, de acuerdo a lo expuesto en los motivos que anteceden, se tendrá por establecido en autos que la empresa demandada incurrió en una omisión negligente, al no haber tomado las medidas necesarias para mantener la seguridad de sus instalaciones, en concreto, en la unidad subterránea donde se hallaron cables conductores cortados, ocasionando con ello variaciones de voltaje en el sector



**Foja: 1**

donde se encuentra ubicado el laboratorio de la Subsecretaría de Salud Pública. Y producto de lo anterior, uno de los equipos de propiedad de dicha entidad sufrió daños irreparables, quedando finalmente inoperativo.

**VIGÉSIMO SEXTO:** Que, en lo que respecta a la existencia de los perjuicios y el nexo de causalidad entre los perjuicios sufridos y la acción u omisión, resulta suficiente a juicio de esta sentenciadora la prueba rendida por la demandante, encontrándose acreditado mediante la prueba documental y testimonial, que producto del incidente eléctrico ocurrido el 16 de agosto de 2016 en el sector de calle San Diego con Eyzaguirre, comuna de Santiago, se produjeron daños en diversos artefactos eléctricos, dentro de los cuales se hallaban los del referido laboratorio, existiendo un perjuicio que derivó necesariamente de la falta de Enel por Enel en adoptar medidas de seguridad para el mantenimiento de sus redes de distribución, encontrándose suficientemente acreditado el nexo de causalidad.

En consecuencia, procede determinar la cuantía y naturaleza de los perjuicios reclamados;

**VIGÉSIMO SÉPTIMO:** Que, en cuanto a los perjuicios, si bien la demandante señala de manera amplia en su libelo la solicitud del monto por el valor del equipo dañado, el tribunal entiende que, al tratarse de una afectación patrimonial, la pretensión indemnizatoria equivale al daño emergente. En efecto, cabe tener presente que este puede ser definido como el empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio de una persona a consecuencia del actuar negligente de otra, el que para ser indemnizable debe cumplir con los requisitos de ser actual, cierto y no hipotético, por lo que cabe al demandante de los perjuicios probarlo.

En este acápite, se demanda la suma de \$285.000 dólares americanos, que corresponden al valor del Espectrómetro ICP-MS. Al respecto y no obstante las dos cotizaciones acompañadas por la demandante para los efectos de acreditar el monto pedido, se estará en este sentido al oficio de fecha 8 de abril de 2019, remitido por Del Carpio Análisis y Asesorías, e incorporado al folio 84, empresa proveedora del equipo siniestrado, que en lo pertinente, indica a través de cotización QN 14089.19 para el Espectrómetro de Masas ICP/MS, marca Thermo Fisher Scientific, modelo iCap RQ (C1), más mantenciones y accesorios para su funcionamiento, un valor total \$241.628 USD, sin IVA incluido. Sin embargo, considerando que el equipo dañado no era nuevo y se encontraba en uso desde antes del incidente que ocasionó su pérdida, necesariamente conlleva una depreciación en su valor, determinada por esta juez en el valor referencial de un 10% del costo del equipo, fijándose entonces el valor a pagar en la suma de \$217.465,2 dólares americanos, correspondiente al equipo Espectrómetro ICP-MS. Desde luego, tratándose de una demanda cuya cuantía ha sido determinada en dólares, lo cierto es que el valor antes dicho debe convertirse en pesos conforme al certificado incorporado por el demandante, de tal suerte que la suma a indemnizar por concepto de daño emergente asciende a \$141.900.392.-.



Foja: 1

**VIGÉSIMO OCTAVO:** Que, dicha suma deberá ser pagada con más reajustes de acuerdo a la variación que experimente el índice de precios al consumidor e intereses corrientes para operaciones no reajustables, ambos contados desde la fecha de notificación del presente fallo y hasta su pago efectivo;

**VIGESIMO NOVENO:** Que, en cuanto a la alegación del hecho de la víctima como eximente de responsabilidad de la demandada, queda demostrado en el caso de marras que no concurre tal circunstancia, pues, acorde a lo ya razonado, el incidente eléctrico que afectó el lugar donde se encuentran las instalaciones del laboratorio de la Subsecretaría de Salud Pública se ocasionó por una falla dentro de la camarilla ubicada en calle Eyzaguirre con San Diego, cuya mantención y seguridad son cargo de Enel Distribución Chile, como proveedor de suministro eléctrico, de manera que no puede atribuirse dicho fundamento al hecho de la víctima, por no corresponder esto último a la causa del daño reclamado. Lo mismo ocurre con la defensa deducida en subsidio de lo anterior, pues, conforme a lo dispuesto por el artículo 45 del Código Civil, el caso fortuito o fuerza mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, y en esta ocasión, el incidente eléctrico se originó por cables cortados dentro de una de las camarillas subterráneas del sector, hecho que en ninguna circunstancia podrá ser calificado como eximente de responsabilidad, toda vez que el proveedor del suministro es precisamente el encargado de mantener la seguridad de sus instalaciones y de tomar las medidas necesarias.

**TRIGÉSIMO:** Que la demás prueba rendida y debidamente ponderada en nada altera lo que viene decidido como tampoco las alegaciones de la demandada en orden a que la actora se habría expuesto imprudentemente al daño, cuestión que, de acuerdo a lo razonado y concluido, no resulta justificada, y por ende, no otorga razones a esta magistratura para acceder a la reducción del monto indemnizatorio en los términos solicitados.

**TRIGÉSIMO PRIMERO:** Que conforme al artículo 144 del Código Adjetivo, se eximirá del pago de las costas a la demandada, por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 254, 346, 358 y 384 del Código de Procedimiento Civil; 1698, 2314 y siguientes del Código Civil; DFL 4/2007; DS 327/97; NSEG.5 E.n 71; se decide que:

**I.- Se rechazan** las tachas deducida por la demandada en contra de los testigos Marcelo Antonio Godoy Estrada, Augusto Sebastián Palma Castro y Gonzalo Diego Valenzuela Velásquez, presentadas por la parte demandante.

**II.- Se rechaza** la tacha deducida por la demandante en contra del testigo Adolfo Sebastián Mallorga Llano, presentado por la parte demandada.

**III.- Se acoge la demanda** deducida a lo principal del folio 1, solo en cuanto se condena a la demandada Enel Distribución Chile S.A a pagar al Fisco de Chile, la suma



**C-35058-2017**

**Foja: 1**

de \$141.900.392.-.por concepto de daño emergente, más reajustes e intereses en los términos dispuestos en el fundamento vigésimo octavo de este fallo.

**IV.-** Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

**Rol C-35058-2017.-**

Pronunciada por doña Romina Oliva Gutiérrez, Juez Suplente del Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, diecisiete de Julio de dos mil veinte**

